

demandado duró más tiempo del que asentó en el testamento y que antes de este y después, confeccionó documentos notariales, prueba que tiene valor pleno y acredita el actuar notarial.

En lo relativo al punto número 2, de la síntesis indicada en el antecedente III, de esta demanda de amparo, el proceder del responsable es inadecuado.

Así es, la prueba de registro fonográfico tiene valor pleno adminiculada con el reconocimiento de su voz realizada por el notario demandado, en donde se aprecia que se dice: "Duró muchísimo" y aunque es cierto que no se dice expresamente que el notario se refiera al testamento impugnado, lo cierto es que se trata de una conversación entre las partes del juicio y, dicha probanza adminiculada con la prueba confesional a cargo del propio fedatario de la que se desprende que no tiene mas trato con las partes que el derivado del acto testamentario, resulta nítido que la referencia al retardo en el tiempo de elaboración notarial es al testamento base de la acción, pues no debe perderse de vista que el tribunal debe apreciar los hechos en relación con la litis y no existe constancia en autos de que se trate de una conversación diversa al acto jurídico material del pleito, por el contrario, de una sana crítica y adminiculación probatoria se obtiene que el retardo en la elaboración del acto lo fue en el testamento.

Con lo anterior, adverso a lo estimado por el responsable, queda demostrada la acción de nulidad testamentaria, en lo referente a que el testamento no fue confeccionado en 20 minutos, sino que, como se dice en el registro fonográfico "duró muchísimo por lo meticulouso".

En lo referente al punto número 3, del antecedente III de esta demanda de amparo, el magistrado incurrió en ilegalidad por lo siguiente:

Como ya lo dejé asentado en el segundo de los conceptos de violación el testamento si debió redactarse ante testigos, porque así lo exige la legislación civil de Michoacán, porque el testamento impugnado desde su elaboración iba a surtir efectos en nuestra entidad, en términos del artículo 20 del código civil de Michoacán, remitiéndome al efecto a lo expuesto en ese concepto violatorio.

Aún en el supuesto de que se aplicase la legislación civil de Jalisco, debe estimarse que el notario demandado debió valerse de testigos ya que de la confesional a cargo del notario demandado se desprende que no conocía al

testador (respuesta a las posiciones 6ª, 7ª y 11ª, mismas que merecen el valor y alcance probatorio pleno), razón por la cual debió identificarlo por medio de atestes y, al no haberlo realizado de esa manera, incurrió en la causa de nulidad invocada.

Siendo irrelevante que el testador fuera ciego, sordo, que no supiera leer o escribir ni que ignorare el idioma español, en tanto que dichos datos no fueron materia de la acción de nulidad, por tanto, fuera de la litis planteada.

Por lo que respecta al punto número 5, del antecedente III de esta demanda de amparo, la resolución del responsable es contraria a derecho.

El magistrado responsable resta alcance probatorio a las testimoniales rendidas en autos.

Esto es ilegal.

Antes que todo debe decirse que la prueba testimonial debe analizarse en su conjunto, es decir, preguntas y respuestas, considerando la declaración del testigo como un todo, pues solo de esa manera adquiere coherencia la deposición, lo cual implica que ni las preguntas ni las respuestas pueden ser analizadas de forma aislada sin disociar la pregunta de la respuesta, ni unas respuestas de otras; lo cual se desprende de las siguientes tesis:

No. Registro: 359,037

Tesis aislada

Materia(s): Civil

Quinta Época

Instancia: Tercera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

XLVII

Tesis:

Página: 4741

PRUEBA TESTIMONIAL, ESTIMACION DE LA.

Si se considera que el testimonio de una persona debe estimarse por el conjunto de respuestas y explicaciones subsidiarias que sobre los hechos, materia del interrogatorio exprese y que tanto las respuestas al interrogatorio directo como al de repreguntas, forman parte integrante de la prueba, es evidente que si del conjunto de ellas puede llegarse a la convicción de la razón por la que el declarante tiene conocimiento de los hechos sobre los que depone, su dicho debe tomarse en cuenta.

Amparo civil en revisión 3014/35. Romero Benito S. 20 de marzo de 1936. Unanimidad de cuatro votos. El Ministro Luis Bazdresch no votó en el asunto por las razones que se expresan en el acta del día. La publicación no menciona a el nombre del ponente.

No. Registro: 243,547

Tesis aislada

Materia(s): Laboral

Séptima Época

Instancia: Cuarta Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

86 Quinta Parte

Tesis:

Página: 52

PRUEBA TESTIMONIAL, APRECIACION DE LA.

La prueba testimonial debe de ser apreciada en su conjunto y no así por los términos aislados en que se formule una posición.

Amparo directo 1875/75. Aseguradora Nacional Agrícola y Ganadera, S.A. 12 de febrero de 1976. Cinco votos. Ponente: María Cristina Salmorán de Tamayo.

Así, la testimonial a cargo de Leonel Andrade Barreto y Genaro Medina Solorio, es una probanza que merece valor y alcance probatorio pleno.

En primer testigo refirió en la declaración a su cargo que conocía al testador por ser del pueblo, incluso vecinos, que platicaba seguido con el testador, que él mismo le indicó que estaba enfermo (incluso lo habían operado de la próstata) y que no estaba sordo, pero que si oía menos (disminución de la audición) porque había que repetirle las cosas para que oyera y que caminaba y hablaba lento desde hacía tiempo, que el conoce los hechos porque le constan incluso estuvo en el velorio, que ya casi no estaba en Tocuambo, Michoacán, solo en ocasiones. Este testigo refiere tener 67 años de edad a la fecha de su declaración.

Por su parte, el diverso testigo Genaro Medina Solorio, refiere que el se vino de la ciudad de Guadalajara junto con el testador cuando este murió, que estaba enfermo de la próstata, que lo operaron y falleció de cáncer, que no escuchaba muy bien, pero no estaba sordo, que siempre andaba con el testador, este testigo refiere tener 80 años de edad a la fecha de su declaración.

Como puede apreciarse el segundo testigo el “primo” a quien se refiere el primer testigo cuando alude a que el testador siempre andaba con un primo para todas partes, y, todos son vecinos y personas casi de la misma edad, por lo que se presume fundadamente que se conocen unos a otros y les constan los hechos, pues en por todos sabido que en los pueblos –como el de Tocumbo- las personas se conocen y saben dar referencias de ellas, porque se ven y platican con frecuencia, sobre todo que son personas de una edad en donde el pueblo era pequeño y sabían de todos, además de conocer los hechos por ellos mismos.

Por tanto, esta prueba merece alcance y valor pleno y con ella se demuestra que el testador en sus últimos días de vida no oía bien, que caminaba lento y había que repetirle las cosas, por su enfermedad (primero operación de próstata) y posterior muerte de cáncer; pues basta que los testigos coincidan en lo esencial y no en los accidentes, pues no presenciaron los hechos los dos atestes al mismo tiempo.

Por tanto, queda demostrado que el notario demandado no pudo leer de corrido al testador el testamento impugnado, pues el testador no estaba en las mejores condiciones de salud, sino disminuido en su audición y físico, con lo cual se prueba dicho aserto expuesto en la demanda y en los agravios adhesivos, adverso a lo estimado por el responsable.

Por su parte los testigos Antonio Godínez Magaña y Blanca Estela Alcázar Andrade, son contestes al afirmar que el señor Ernesto Arturo González Andrade fue quien elaboró la lista de los bienes materia del testamento para que el notario demandado bajo esa base pudiera confeccionar la última voluntad del testador, manifestando que los saben de manera directa por el propio Ernesto Arturo González Andrade, lo que evidencia que los testigos conocen los hechos por sí mismos, por su edad y conocimiento percibieron los hechos fundadamente, lo que genera valor y alcance convictito a efecto de acreditar que lo asentado en el testamento no fue la voluntad del testador, sino que hubo personas que indujeron al error, sin permitir que el testador dispusiera de manera libre de sus bienes ni el acto se llevó a cabo de manera continuada, pues previamente por otra persona se sujetó la voluntad del testador, lo que es contrario a derecho.

La testimonial singular de Sonia de la Cruz Alcázar Andrade, afirma que el día en que el notario demandado leyó el testamento a los herederos, el propio notario le dijo a Ernesto Arturo González Andrade que le entregaba los documentos que dicha persona le había proporcionado al notario para elaborar el testamento de su padre, esta prueba merece valor pleno atentos

a que tiene concordancia con las anteriores testificales –es acumulativa- y fue hecha por persona que le constan los hechos, razón por la cual demuestra plenamente y tiene alcance demostrativo al efecto de acreditar que el testador no emitió su voluntad libre y conciente, sino que fue inducido por terceras personas a ello, lo cual acredita mi acción.

En este contexto, las testimoniales antes referidas son suficientes y bastantes para acreditar los extremos de mi acción, adminiculadas con las demás pruebas constantes en autos, adverso a lo estimado por el responsable.

Es ilegal lo afirmado por el responsable en el sentido de que para acreditar la disfunción auditiva y el mal físico del testador es necesario una constancia médica, pues para demostrar ese extremo bastan las testimoniales, pues los testigos pueden acreditar la realidad física del testador, pues lo conocieron personalmente y lo trataron cotidianamente, y, al ser la testimonial una prueba permitida por la ley adjetiva civil -en términos del artículo 393- y, esta, permite probar la acción con cualquier medio de prueba que la ley permita, sin que sea exclusivo demostrar el mal físico con una pericial como lo pretende el magistrado responsable; por lo que es válido concluir que el mal físico puede demostrarse a través de la testimonial.

Ahora, el hecho de que los testigos refieran hechos acaecidos dos meses antes de la fecha del testamento, tal aseveración del responsable no está fundada ni motivada pues no dice de que respuesta se desprende tal argumento y, además, es por todos conocido que el mal físico de las personas de edad avanzada no es reversible, por lo que es perfectamente creíble que a pesar de que la declaración indica dos meses previos el testador ya no tuvo mejoría en su salud, por lo que de allí se deriva que a la fecha del testamento seguía padeciendo las mismas afecciones.

Es cierto que a los testigos no les consta que el testador fuere sordo, porque en realidad no lo era, ya que como se aprecia de la demanda nunca se dijo que el testador fuera sordo, sino que solamente se encontraba afectado de la audición y que, para oír, tenían que repetírsele en voz muy alta las cosas y de manera lenta para que entendiera; por tanto, el responsable se salió de la litis planteada, pues nunca se dijo que el testador fuere sordo, sino solo que su audición estaba disminuida, cuestión esta que como ya se vio los testigos declararon y fueron contestes al respecto.

El testigo Andrade Barreto dijo que caminaba en forma lenta y los demás no lodijeron así textualmente, pero si coincidieron en que estaba operado de la

próstata y que murió de cáncer y que tenía disminuida su audición, por lo que el andar lento solo es una cuestión de accidente de la declaración que no afecta la sustancia de ella, por lo que no debió restársele alcance demostrativo.

Es falso que a los testigos Antonio Godínez Magaña y Blanca Estela Alcázar Andrade no les consten los hechos por sí mismos, pues como se advierte de sus declaraciones y del análisis previo que se realizó en esta demanda de amparo, si les constan por sí mismos, pues lo supieron de los propios demandados (Ernesto Arturo González y el notario demandado), lo que no genera la incertidumbre que el magistrado les imputa, pues conocieron los hechos por sí mismos y por referencia de los propios reos.

Y la testimonial singular está robustecida con las anteriores testimoniales y con el restante acervo probatorio constante en autos, como ya lo expliqué, adverso a lo estimado por el responsable.

Así, quedó demostrado que el testamento no lo dictó el testador –sino su hijo Ernesto Arturo y la esposa de este- y, previamente se le dio al notario un documento, lo cual deja en claro que no se pudo elaborar el testamento en los 20 minutos que aduce el notario, dadas las afecciones de salud –ya indicadas- del testador.

En relación con lo indicado en el punto 4, del antecedente III de la síntesis de esta demanda de amparo, digo lo siguiente:

Contrario a lo expuesto por el magistrado responsable, de las pruebas confesionales a cargo de los demandados si se obtienen datos que acreditan la nulidad del testamento, como paso a indicar.

El notario demandado, confesó que su nombre es el que se asienta en el testamento impugnado (posición 1), que funge actualmente como notario en Tlaquepaque, que el día 30 de enero de 2004 fungía como notario en la ciudad indicada, que en la fecha señalada a las 17:00 horas el testador compareció ante su presencia, que antes de la fecha y hora del testamento conocía al sr. Ernesto Arturo González Andrade, que en la fecha y hora del testamento no conocía al testador, que el día y hora del testamento el testador le indicó ser originario de Tocumbo, Michoacán y que se encontraba de paso por la ciudad donde testó (respuesta afirmativa a las posiciones 2 a la 8); que el día 30 de Enero de 2004 desconocía la descripción de bienes objeto del testamento y que, es inverosímil haber confeccionado el testamento en 20 minutos a partir de las 17:00 horas, que en el testamento

no se ocuparon testigos (respuesta afirmativa a las posiciones 10 y 11); que reconoce como suya la firma que aparece en la solicitud de expedición de copia certificada directa del libro protocolo del testamento impugnado, así como la razón denegatoria de la expedición y de solo expedir testimonio (respuestas a las posiciones 23 y 24).

Como se aprecia, adverso a lo ponderado por el responsable de la confesional a cargo del fedatario demandado si se obtienen datos suficientes que acreditan la nulidad del testamento, pues el propio notario confiesa que es falso haber confeccionado el testamento en 20 minutos (respuesta a la posición 10) y que no expidió las copias pedidas por el actor, lo cual revela la intención de no mostrar el documento original (que supuestamente contiene las firmas y huellas del testador) para evitar conocer la verdad; y, también confesó haber conocido al señor Ernesto Arturo González Andrade antes de la celebración del testamento, pero manifestó desconocer al testador hasta el momento de la celebración del testamento, y, de igual manera, confesó que no conocía los bienes objeto del testamento.

Con lo anterior queda demostrado plenamente las causas de nulidad del testamento, consistentes en que el notario no pudo confeccionar el testamento en los 20 minutos que dice haberlo realizado, por no conocer el contenido de los bienes testados, ni al testador (por lo que debió ocupar testigos instrumentales) y que, solo conocía al señor Ernesto Arturo González Andrade, lo cual adminiculado con las testimoniales, hace presumir fundadamente que fue este último quien preparó el testamento, sin que el testador lo dictara por sí mismo, lo que pugna con la naturaleza y fin del testamento, por lo cual es nula la última voluntad del señor Emigdio González Medina, pues la confesión del notario merece valor probatorio pleno y tiene el alcance suficiente para acreditar los extremos de la acción intentada, contrario a lo expuesto por el responsable, quien escuetamente señala que no tiene alcance probatorio alguno, empero no realizó ningún estudio pormenorizado de esta probatura –como lo acabo de realizar-, lo que me agravia.

Por tanto, con esta prueba confesional a cargo del notario es suficiente para acreditar la acción, con entera independencia de la diversa confesional a cargo del señor Ernesto Arturo González Andrade, en tanto que quien confeccionó el testamento es quien conoce los hechos mejor y, dicho notario ya confesó que el testamento no se hizo en 20 minutos y las demás cuestiones ya indicadas, por lo que tal testamento es nulo.

Contrario a lo estimado por el responsable, de la respuesta a la posición 10 si se obtiene que el notario no confeccionó el testamento en el tiempo que asentó en el acto notarial, lo que revela la inverosimilitud del contenido del testamento y, desde luego, el hecho de que no conociere la relación de los bienes objeto del testamento apoya la aseveración de que el testamento no se realizó en 20 minutos, dado que al desconocer dichos bienes, la hechura del testamento fue de mayor duración temporal, lo que corrobora la imposibilidad material de la elaboración del testamento en el lapso ya mencionado. Y claro que en el agravio se menciona el alcance de la confesión notarial en el sentido de que el fedatario no conocía los bienes, pues posteriormente se alude a que el testamento –ante el desconocimiento de los bienes- debió durar temporalmente mas de lo que el notario asentó en el testamento, lo que pugna con lo resuelto por el magistrado.

Si hay confesión del notario en donde se acredita la violación a los principios rectores de los testamentos –como son la certeza, formalidad y seguridad- pues al no poder materialmente elaborarlo en 20 minutos, tal proceder es ilegal, además de no haberlo confeccionado ante testigos a pesar del desconocimiento del testador, y, la presencia de la señora Sonia de la Cruz Alcazar si bien no es causa de nulidad del testamento, si es un dato que relaciona las pruebas testimoniales que obran en autos y les dan crédito a ellas.

Si bien la lectura del testamento no rige una forma especial, si las condiciones en que se generó suscitan dudas y reticencias y conllevan a determinar su nulidad.

Ahora, la confesional a cargo de Ernesto Arturo González Andrade si se obtiene datos suficientes para engarzar otras pruebas de autos y que esta confesión goce de alcance y valor pleno.

El referido absolvente confesó a las posiciones 1, 2, 10, 13, 14 y 22, en el sentido de ser el absolvente, de conocer al testador por ser su padre, que el día 6 de Enero de 2005 a las 12:00 horas concurrió a la notaria en donde se elaboró el testamento para oír la lectura de dicho documento por el notario demandado, que también en esa hora y fecha concurrió a la lectura la señora Sonia de la Cruz Alcázar Andrade y que, el 26 de diciembre de 2004 como a las 19:00 horas en la calle de Madero 32, de Tocumbo, Michoacán, les comentó a los señores Genaro Medina y J. Jesús Godínez Villanueva que el testamento decía que le tenía que dar a Vidal González Andrade la suma de \$300,000 pesos pero no decía cuando.

De la anterior declaración si bien no se obtiene confesión directa de nulidad del testamento, si se generan datos que permiten concluir que las testimoniales que obran en autos son fidedignas, pues concuerdan con lo relatado en esta confesional.

Por tanto, de ambas confesionales se obtienen datos directos de nulidad del testamento, como ya se dijo, y, también datos indirectos que relacionan con las demás pruebas (testimoniales, inspecciones) y les dan certidumbre y credibilidad, adverso a lo estimado por el responsable.

En estas condiciones, relacionadas todas las pruebas antes aludidas en su conjunto y debiéndose valorar las presunciones² humanas, al tenor de la siguiente tesis:

No. Registro: 187,931
 Jurisprudencia
 Materia(s): Común
 Novena Época
 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
 XV, Enero de 2002
 Tesis: VI.2o.C. J/217
 Página: 1205

PRUEBA PRESUNTIVA. SU VALORACIÓN.

Los tribunales, según la naturaleza de los hechos, la prueba de ellos y el enlace más o menos necesario que exista entre la verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las presunciones, hasta el grado de poder considerar que su conjunto forma prueba plena.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo directo 48/90. Rafael Dante Olivares Bazán. 20 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez.

Amparo directo 131/95. Octavio Augusto Curro Castillo. 3 de mayo de 1995. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

Amparo directo 344/96. Alejandro Rueda Tototzintle. 3 de julio de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: José Mario Machorro Castillo, secretario de tribunal en funciones de Magistrado por ministerio de ley, en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

Amparo directo 140/97. Gabino Morales Ramírez y otra. 12 de marzo de 1997. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Meza Alarcón. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

Amparo directo 393/2001. María del Pilar Leticia Rivera Rodríguez. 31 de octubre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez. Secretario: Eduardo Iván Ortiz Gorbea.

² No. Registro: 198,453.- Jurisprudencia.- Materia(s): Civil, Penal.- Novena Época.- Instancia: Primera Sala.- Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.- V, Junio de 1997.- Tesis: 1a./J. 24/97.- Página: 223.- PRUEBA INDICIARIA, LA FORMA DE OPERAR LA, EN EL DERECHO PROCESAL PENAL Y CIVIL, ES DIFERENTE AL DEPENDER DEL DERECHO SUSTANTIVO QUE SE PRETENDE.

Tenemos que:

- De la inspección judicial asistida de peritos, quedó acreditado la imposibilidad material para elaborar el testamento en 20 minutos, como falsamente lo refirió el notario demandado.
- De la inspección a los libros de la notaria se desprende que en ningún acto el notario dilata solo 20 minutos.
- De las documentales indicadas a fojas 256 y 257 de autos de primera instancia se aprecia la muerte del testador y el testamento impugnado, así como la negativa del notario reo a expedir copia directa del testamento que obra en su archivo y donde consta – supuestamente- la firma y huella auténtica del testador, lo que genera la presunción humana de ocultamiento de la verdad, y, presume, falsedad de la disposición testamentaria, ya que la ley notarial faculta a las partes para pedir documentos notariales.
- De las testimoniales se desprende que el testador estaba disminuido en su función auditiva y estaba enfermo de la próstata y cáncer, que Ernesto Arturo González Andrade y su esposa proporcionaron, previamente a la elaboración del testamento, al notario demandado un listado de bienes y repartición de los mismos, lo cual revela que el testador no emitió su voluntad de manera libre.
- Las Confesionales a cargo de los demandados, como ya lo expliqué si arrojan datos que demuestran la nulidad del testamento, contrario a lo estimado por el responsable, y, también se obtienen datos que relacionan los hechos con las demás pruebas del juicio, como las testimoniales, por lo que estas, engarzadas con las confesionales, adquieren eficacia demostrativa.
- Presunciones: de todo lo anterior se obtiene que el señor Emigdio González como testador, fue inducido por su hijo Ernesto Arturo González Andrade a concurrir a la notaria demandada, en donde el testamento no se efectuó en el tiempo que se dijo, ni con las formalidades legales, ni dictó su voluntad por si mismo, lo que genera la presunción fundada de que el acto notarial del testamento es falso, como el propio notario lo confesó al dar respuesta a la posición 10, y que, en conclusión, la última voluntad del testador está viciada de nulidad.

Todas la anteriores probanzas, enlazadas unas con otras demuestran los motivos de la acción de nulidad del testamento demandada, además de que una vez concatenadas, existen presunciones legales y humanas suficientes y bastantes para presumir que el testamento base del juicio es ineficaz, como

se pretende y, por ello, procede declarar su nulidad, adverso a lo estimado por el magistrado responsable.

Es cierto que no hay precepto que obligue al notario a elaborar un testamento en determinado tiempo (20 minutos), sin embargo, tal circunstancia no se desprende de la ley, sino de la lógica, la experiencia y de una base objetiva y racional que debe ser analizada por el juzgador, pues si el notario asentó un tiempo de duración y dicho lapso es material y jurídicamente imposible, bien porque se notoria esa imposibilidad o se derive de la demostración –mediante pruebas como aconteció en la especie- en autos, el tribunal debe destruir el acto notarial falso, por no haberse efectuado en el tiempo asentado en dicho instrumento, por lo que el testamento impugnado si es nulo, adverso a lo estimado por el responsable.

Sin que sea óbice el hecho de que la hora y fecha de un testamento solo es trascendente cuando hay varios testamentos, pues en este caso no se debate la validez temporal del testamento, sino su nulidad por falsedad de los datos asentados en el propio acto notarial, por lo que el magistrado responsable se equivocó en su apreciación.

Se violan las formalidades esenciales del procedimiento y las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por los motivos expuestos en este apartado, lo cual conculca el artículo 14 Constitucional.

La sentencia reclamada no está fundada ni motivada, por las razones indicadas en este concepto violatorio, por lo que se viola el artículo 16 Constitucional.

Se vulnera el artículo 17 Constitucional, dado que el responsable no siguió los principios de justicia completa (exhaustividad y congruencia), dictada en los plazos y términos que fija la ley e imparcial, por los motivos indicados antelativamente.

CUARTO: Violación cometida por el responsable en los considerandos tercero y cuarto de la sentencia reclamada, de las garantías consagradas a favor de mi mandante en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, en relación con los artículos 600 a 606 y 379 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por su falta de observancia.

En la demanda –hechos II, III, IV y V- expuse como hecho notorio el que el testamento base del juicio no había podido confeccionarse en tan solo 20

minutos, como lo asentó el notario demandado en el testamento impugnado, pues tal acto constaba de tres hojas a doble espacio por los dos lados y, para captar la voluntad del testador, asentarla y revisarla –a través de la lectura final por parte del notario o del interesado- es imposible efectuar dicho acto en ese lapso, por lo que sin necesidad de prueba quedaba demostrado lo argumentado como motivo de nulidad.

Lo así expuesto es un hecho notorio que no requiere de ser probado, pues basta un conocimiento común y corriente para establecer que es imposible materialmente captar y concluir un testamento, como el de la especie, en tal solo 20 minutos.

Dicho hecho notorio no fue apreciado por el juez a quo en su sentencia, razón por la cual el suscrito enderecé agravios adhesivos a efecto de que en la sentencia de segunda instancia se aludiera a dicho hecho notorio, para reforzar el argumento de primera instancia.

Sin embargo, el magistrado responsable simple y sencillamente omitió por completo pronunciarse sobre dicho hecho notorio, mismo que no requiere prueba, por ser del conocimiento de todos, al tenor del artículo 379 del código adjetivo civil.

Por tanto, si el suscrito alegué en mi demanda y en mis agravios adhesivos tal hecho notorio y el magistrado responsable no se pronunció, no analizó ni estudió tal hecho notorio como demostrativo de mi acción de nulidad de testamento, tal proceder me agravia, pues es una renuencia injustificada a estudiar mis agravios.

Aunque el suscrito no le haya denominado expresamente “hecho notorio”, el juez y el magistrado tienen el deber de estudiarlo por ser peritos en derecho, dado que si lo argumenté y, por ello, tienen obligación de pronunciarse al respecto, por lo que al no haber resuelto nada al respecto se me agravia.

Se violan las formalidades esenciales del procedimiento y las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por los motivos expuestos en este apartado, lo cual conculca el artículo 14 Constitucional.

La sentencia reclamada no está fundada ni motivada, por las razones indicadas en este concepto violatorio, por lo que se viola el artículo 16 Constitucional.

Se vulnera el artículo 17 Constitucional, dado que el responsable no siguió los principios de justicia completa (exhaustividad y congruencia), dictada en los plazos y términos que fija la ley e imparcial, por los motivos indicados antelativamente.

QUINTO: Violación cometida por el responsable en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, de las garantías consagradas a favor de mi mandante en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, en relación con los artículos 600 a 606 y 694, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado, por su falta de observancia.

Es desacertado y carente de sentido jurídico lo resuelto por el responsable en el considerando cuarto de la sentencia reclamada, pues en tal considerando dice “resolver” los agravios principales de los demandados y, omite por completo su estudio pormenorizado, pues simplemente señala que los agravios causados a los apelantes principales están resarcidos al haberse estudiado previamente los agravios adhesivos y, haberse decretado la insuficiencia de alcance probatorio de todos los medios de convicción rendidos por la parte actora, por lo que debe revocarse la sentencia apelada y decretarse la improcedencia de la acción, sin que sea necesario estudiar las excepciones opuestas pues dada la improcedencia de la acción la sentencia no podría ser mas benéfica para los reos.

Ese modo de resolver es contrario a derecho.

Como se dejó plasmado en el primero de los conceptos de violación, al que me remito en obvio de reiteraciones estériles, el magistrado debió, en principio, estudiar los agravios principales de los apelantes directos, analizarlos minuciosamente para determinar si eran fundados, infundados, inatendibles, inoperantes o improcedentes, pues es la apelación principal la que da origen al estudio de la sentencia apelada, ya que los agravios adhesivos siguen la suerte de la apelación directa.

En esas condiciones, es desacertado que el magistrado responsable haya resarcido los agravios –sin estudiarlos específicamente- a los apelantes directos, con el estudio de los agravios adhesivos del suscrito, pues tal proceder es contrario a derecho, por lo que no es factible jurídicamente resarcir una apelación principal con el estudio primario de la adhesiva, como aconteció, pues tal proceder es técnica y jurídicamente inadmisibile.

Por tanto, lo procedente es que el responsable estudie en primer lugar los agravios principales con plenitud de jurisdicción, y, hecho que sea, proceda al análisis de los adhesivos.

Pues puede acontecer que los agravios principales sean inoperantes o inatendibles y, en este caso, la apelación adhesiva sigue la suerte de lo principal –confirmar la sentencia-, sin necesidad de estudio de los adhesivos, ante la improcedencia de los principales.

Y solo si fueren fundados los principales, se procedería a estudiar los adhesivos, para determinar si refuerzan los argumentos de la sentencia apelada y, en este caso, modificarla, revocarla o confirmarla.

Es contraria a derecho la respuesta del magistrado responsable del agravio del notario demandado en el sentido de que el alcance probatorio de los medios convictivos rendidos en autos es insuficiente y a que la inspección judicial asistida de peritos no merece crédito, ni que el testamento no requiera de presencia de testigos, que el testador estuviere afectado de su audición y de salud o haya tenido impedimento para dictar su voluntad.

Es ilegal lo anterior, porque como se vio en el segundo y tercer conceptos de violación –a los que me remito para evitar repeticiones inútiles-, el testamento si debió contener la presencia de tres testigos, el testador si estaba afectado de su audición, estaba mal de salud y, el notario demandado no pudo elaborar el testamento en 20 minutos ni lógica, material ni jurídicamente, lo cual está demostrado con las pruebas y argumentos que dejé precisados en dichos conceptos violatorios, por lo que carece de razón el responsable.

En estas condiciones, lo que debió el responsable es avocarse al estudio de los agravios directos, hecho lo cual, analizar los adhesivos, y, estudiar con plenitud de jurisdicción las cuestiones omitidas por el juez natural, adverso a lo estimado por el magistrado responsable.

Es, también improcedente que en la sentencia reclamada se ordene la continuación del juicio sucesorio, dado que el testamento es nulo y, por tanto, debió nulificar las actuaciones de tal sucesión, al tramitarse con base en un documento ineficaz.

Así, aunque el magistrado responsable determinó que el valor –pleno- concedido por el juez a quo deberá quedar intocado, pero afectó el alcance probatorio de los medios de convicción aportados al juicio natural, como se estudió en el tercero de los conceptos de violación, los medios probatorios

rendidos por mi mandante si son aptos para causar convicción en el tribunal y, además, tienen el alcance probatorio suficiente para acreditar la acción de nulidad ejercida, remitiéndome a lo expuesto en los conceptos de violación precedentes a este.

Por lo que la acción de nulidad de testamento es procedente.

Se violan las formalidades esenciales del procedimiento y las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por los motivos expuestos en este apartado, lo cual conculca el artículo 14 Constitucional.

La sentencia reclamada no está fundada ni motivada, por las razones indicadas en este concepto violatorio, por lo que se viola el artículo 16 Constitucional.

Se vulnera el artículo 17 Constitucional, dado que el responsable no siguió los principios de justicia completa (exhaustividad y congruencia), dictada en los plazos y términos que fija la ley e imparcial, por los motivos indicados antelativamente.

SEXTO: Violación cometida por el responsable en los considerandos cuarto y sexto de la sentencia reclamada, de las garantías consagradas a favor de mi mandante en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, en relación con los artículos 138 a 140 del código de procedimientos civiles del Estado, por su incorrecta interpretación.

El magistrado responsable determinó revocar la sentencia y condenar a mi mandante al pago de la costas de primera y segunda instancias.

Lo así resuelto es ilegal.

Como se vio de lo expuesto en los párrafos precedentes, la acción propuesta por mi poderdante debió declararse procedente y, confirmar la sentencia recurrida, lo que conlleva a determinar que deben decretarse las costas de primera instancia a cargo de los terceros perjudicados, por haber sucumbido ante mis reclamaciones y, también, debió condenárseles al pago de las costas de segunda instancia, por no haber obtenido la revocación de la sentencia de primer grado.

Se violan las formalidades esenciales del procedimiento y las leyes expedidas con anterioridad al hecho, por los motivos expuestos en este apartado, lo cual conculca el artículo 14 Constitucional.

La sentencia reclamada no está fundada ni motivada, por las razones indicadas en este concepto violatorio, por lo que se viola el artículo 16 Constitucional.

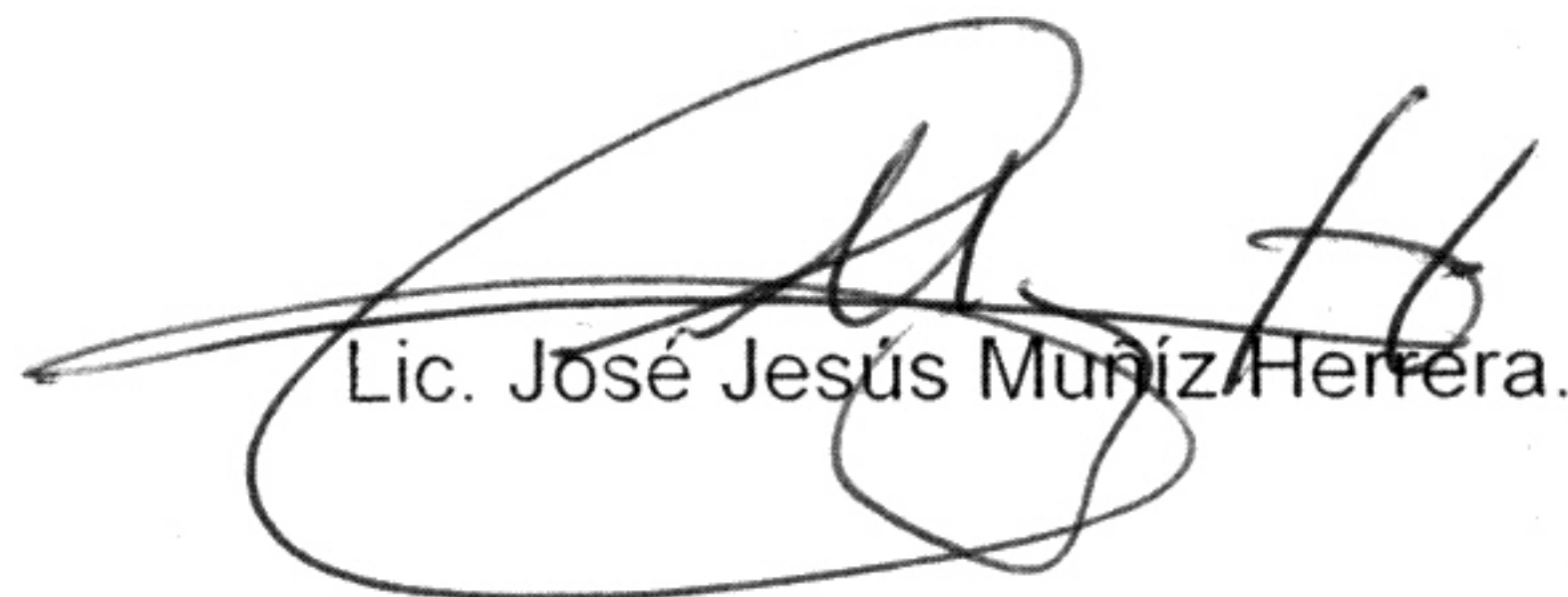
Se vulnera el artículo 17 Constitucional, dado que el responsable no siguió los principios de justicia completa (exhaustividad y congruencia), dictada en los plazos y términos que fija la ley e imparcial, por los motivos indicados antelativamente.

Por lo expuesto y fundado;

A ESTE TRIBUNAL ATENTAMENTE PIDO:

ÚNICO: Proveer de conformidad.

Morelia, Michoacán de Ocampo a 7 siete de Febrero de 2008 dos mil ocho.-



Lic. José Jesús Muñoz Herrera.